



Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2
CPE 121/2021/TO1/8

Buenos Aires, 29 de agosto de 2023.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa **N° CPE 121/2021/TO1** caratulada “**CUELLO, Roberto Eduardo y EZEIZA SECURITY S.R.L. s/Infracción Ley N° 24.769**”, seguida a **Roberto Eduardo CUELLO**, *argentino, nacido el 17/10/1952 en la localidad de Ciudadela, PBA, DNI N° 10.641.439, hijo de Roberto y de Martina Mendeberry, de estado civil casado, licenciado en seguridad especializado en criminología, desempeñándose en una empresa de seguridad, y con domicilio real en la calle Neuquén N° 550 piso 2do. dpto. “B” de CABA y, la persona jurídica “**EZEIZA SECURITY S.R.L.**”, (CUIT N° 30-71055094-4, con domicilio fiscal en la calle Pichincha N° 1555 de CABA, representada en autos por su presidente, Roberto Eduardo CUELLO)*, del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, bajo la modalidad de integración unipersonal incorporada por la ley N° 27.307.

Y CONSIDERANDO:

1. Que, conforme surge del requerimiento de elevación a juicio formulado en las presentes actuaciones se atribuye a Roberto Eduardo CUELLO y la persona jurídica EZEIZA SECURITY S.R.L., los hechos que se encuentran circunscriptos a la apropiación indebida de los recursos





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

pertenecientes al Sistema Único de la Seguridad Social correspondientes a los períodos fiscales: abril/2016 (\$ 258.452,10), octubre/2016 (\$ 271.727,06), febrero/2017 (\$ 357.344,59 y mayo/2017 (\$ 356.995,03)¹.

2. Que, en esa oportunidad, los hechos descriptos por la consideración anterior fueron calificados respecto a Roberto E. CUELLO bajo las previsiones del art. 9 de la ley N° 24.769 –modificado por el art. 8 de la ley N° 26.735– vigente a la fecha de los hechos, y respecto a la persona jurídica EZEIZA SECURITY S.R.L., bajo las previsiones de los arts. 7 y 13 del Régimen Penal Tributario, aprobado por el art. 279 de la ley N° 27.430. La comisión de tales hechos fue atribuida al nombrado CUELLO y a la persona jurídica EZEIZA SECURITY S.R.L. en carácter de coautores (art. 45 del Código Penal).

3. Que, a partir de la presentación de fecha 16/08/2023 la defensa particular de Roberto Eduardo CUELLO y de la persona jurídica EZEIZA SECURITY S.R.L., solicitó la suspensión de juicio a prueba respecto a sus asistidos, en los términos de los arts. 76 y concordantes del Código Penal, en base a los argumentos allí desarrollados, a los cuales se remite por razones de brevedad y a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

¹ Requerimiento fiscal de elevación a juicio de fecha 22/05/2023.





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2
CPE 121/2021/TO1/8

4. Que, contestando lo requerido por el Tribunal, en su presentación de fecha 25/08/2023 la representante de la A.F.I.P.-D.G.I, informó respecto a los contribuyentes Roberto Eduardo CUELLO y EZEIZA SECURITY S.R.L. que los montos denunciados en ambos conceptos (imp. 301 y 302) por los períodos solicitados se encuentran cancelados a la fecha. A tal fin adjuntó cuadro de “Deuda y pantallas de pago del Sistemas Tributarios” aportados por la Oficina de Cobranzas Administrativas.

5. Que, mediante el acta del 28 de agosto pasado se documentó la audiencia prevista por el artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación llevada a cabo por intermedio de la plataforma virtual “Zoom”, con la intervención de la Auxiliar Fiscal Dra. Melina SINGEREISKY en representación del Ministerio Público Fiscal (siguiendo las directivas del Fiscal General Dr. Marcelo AGÜERO VERA, interinamente a cargo de la Fiscalía N° 3 actuante y en los términos del art. 51 de la ley N° 27.148), el imputado Roberto Eduardo CUELLO –a título personal y en representación de la persona jurídica EZEIZA SECURITY S.R.L.- y su defensor particular Dr. Ricardo R. CARUSO

6. Cabe señalar que no compareció a la audiencia representante alguno de la A.F.I.P.-D.G.I. en su calidad de supuesta damnificada, pese a encontrarse debidamente notificada. Sin perjuicio de ello, mediante presentación de





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

fecha 25/08/2023 efectuada por la funcionaria Dra. Daiana Pamela TURNES, se opuso a la concesión del beneficio solicitado por los imputados Roberto Eduardo CUELLO y EZEIZA SECURITY S.R.L., con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del art. 76 bis del Código penal, - criterio sustentado por la Dirección de Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social de la A.F.I.P.- por el cual se prohíbe la aplicación de la Suspensión del Juicio a Prueba en delitos de vinculados a las leyes N° 22.415 y N° 24.769 y sus respectivas modificatorias (párrafo incorporado por el art. 19 de la ley N° 26.735). Sostuvo que dicho instituto se trata de un régimen de excepción y su aplicación debe garantizar la armonía del ordenamiento jurídico para preservar la igualdad en la aplicación de la ley penal vigente. Reiteró que la suspensión del juicio a prueba resulta incompatible con los procesos en los que se investigan hechos tipificados por la Ley Penal Tributaria, intención que el legislador dejó expresamente contemplada al modificar el art. 76 bis del C.P. Finalmente tras plasmar su oposición al planteo de la defensa, solicitó que se lleve a cabo el juicio de acuerdo a lo establecido en el código ritual. Formuló las reservas del caso.

7. Que, en tal ocasión, la defensa particular sobre la base de los fundamentos detallados en el acta mencionada (a los que se remite por razones de brevedad y





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

a fin de evitar reiteraciones innecesarias), solicitó la suspensión de juicio a prueba respecto a sus asistidos Roberto Eduardo CUELLO, por sí y en representación de la firma EZEIZA SECURITY S.R.L. por el término de UN (1) AÑO con una carga de ciento veinte (120) horas.

En lo sustancial, manifestó que se encontraban reunidos los requisitos exigidos por la referida norma que regula el instituto de suspensión de juicio a prueba y que debía efectuarse una interpretación amplia del art. 76 bis 4to. párrafo del C.P. Citó en apoyo de sus dichos el fallo “ACOSTA” de la C.S.J.N. y la jurisprudencia que se generó en consecuencia.

Refirió que, habiendo tomado conocimiento el imputado de autos de la existencia del reclamo de la deuda por parte de la A.F.I.P., en el mes de agosto de 2022, procedió al pago correspondiente a los aportes de la seguridad social que se estaban reclamando, correspondientes a los períodos abril/2016, octubre/2016, febrero/2017 y mayo/2017, con sus punitorios. Agregó que ingresó un comprobante de pago por la suma de cuatro millones, cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y un mil pesos con sesenta y seis centavos (\$ 4.484.651,66), circunstancia que se encontraba verificada y acreditada en el expediente.





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

Sostuvo que el art. 26 del C.P. establecía que era facultad de los jueces conceder el beneficio de suspensión de juicio a prueba y que debía tenerse en consideración la personalidad moral del imputado, actitud posterior al hecho, naturaleza del hecho, carencia de antecedentes penales, que tenía una familia constituida, que seguía trabajando en la actualidad en una empresa de seguridad que generaba empleo, su conducta irreprochable y que siempre había estado ajustado a derecho.

Expuso que existía un obstáculo que debía sortearse que consistía en la imposibilidad legal prevista en el art. 76 bis del C.P., con motivo de la modificación introducida por el art. 19 de la ley N° 26.735, que vedaba la posibilidad de conceder el beneficio de suspensión de juicio a prueba a los delitos contemplados en la ley N° 24.769.

Destacó que la aludida norma afectaba la seguridad jurídica y el principio de igualdad en la medida que la ley no establecía criterios objetivos y razonables para excluir al delito que aquí se les imputaba al beneficio de suspensión de juicio a prueba. Agregó que, el sentido del legislador nunca había sido de aplicar dicha prohibición a delitos leves sino a perjuicios económicos graves y de importancia, destacando que no resultaba ser el caso de autos. En consecuencia, solicitó que no resulte de aplicación la prohibición aludida al caso concreto.





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2
CPE 121/2021/TO1/8

Puso de relieve que, sorteado dicho impedimento, solicitaba que se conceda el beneficio de suspensión de juicio a prueba a Roberto Eduardo CUELLO por el término de UN (1) AÑO, conforme las previsiones del art. 76 bis del CP,

Indicó con relación a la realización de tareas comunitarias, que ofrecía realizarlas por el término de ciento veinte (120) horas durante el plazo aludido, debiendo contemplarse que en la actualidad el nombrado CUELLO se encontraba trabajando y que tenía 70 años de edad. En ese aspecto y por cuestiones de cercanía al domicilio del nombrado ofrecía realizar dichas tareas en la Parroquia “Buen Pastor” sita en Aranguren 691 de CABA o en la institución que el Tribunal determine.

En cuanto a la reparación del daño manifestó que Roberto Eduardo CUELLO, a título personal, ofrecía la suma de ochocientos noventa y siete mil pesos (\$ 897.000), a pagar, en caso de ser posible, en dos (2) cuotas. Preciso que dicho monto representaba el 20% de lo oportunamente pagado en concepto de deuda e intereses.

En representación de la firma EZEIZA SECURITY S.R.L., el nombre CUELLO ofreció donar cincuenta (50) kg de mercadería a favor de la institución que el tribunal estime conveniente.





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

Por todo lo expuesto, manifestó que se encontraban satisfechos los requisitos exigidos por la norma que regula el instituto de suspensión de juicio a prueba y, por lo tanto, reiteró la solicitud de suspensión de juicio a prueba a favor de Roberto Eduardo CUELLO, por sí y en representación de la firma EZEIZA SECURITY S.R.L. por el término de UN (1) AÑO con una carga de ciento veinte (120) horas.

Cabe señalar que las condiciones en base a las cuales la defensa postuló la suspensión del juicio a prueba de sus asistidos, fueron ratificadas y aceptadas personalmente por parte de Roberto Eduardo CUELLO -por si- y en representación de la persona jurídica EZEIZA SECURITY S.R.L. en el marco de la audiencia. Asimismo y en igual sentido se expresó en cuanto a que consentía la realización de tareas comunitarias por un total de ciento noventa y dos (192) horas, equivalentes a (4) horas semanales.

8. Que, a su turno, sobre la base de los fundamentos que también se desprenden del acta referida, la representante del Ministerio Público Fiscal interviniente prestó su consentimiento para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba solicitada por el imputado Roberto Eduardo CUELLO -por si- y en representación de la





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2
CPE 121/2021/TO1/8

persona jurídica EZEIZA SECURITY S.R.L. en el marco de la audiencia.

En lo sustancial, manifestó que, los hechos por los cuales se encontraban requeridos a juicio Roberto Eduardo CUELLO y la empresa EZEIZA SECURITY S.R.L. consistían en la omisión de ingresos al Sistema de la Seguridad Social por los períodos abril/2016, octubre/2016, febrero/2017 y mayo/2017, y que fueron calificados en los términos del art. 9 de la ley N° 24.769 respecto de Roberto Cuello y; en los términos de los arts. 7 y 13 del nuevo Régimen Penal Tributario, instaurado por el artículo 279 de la ley N° 27.430 respecto a la firma EZEIZA SECURITY S.R.L., por resultar más benigna que la prevista en el art. 14 de la ley N° 24.769.

Señalo que de acuerdo a las penas previstas, al fallo “ACOSTA” de la C.S.J.N. y siguiendo la doctrina de la Procuración General de la Nación en la Resolución 86/2004, era procedente la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba. Ello, en la medida en que el presente caso se enrolaba en el cuarto párrafo del art. 76 bis del C.P., en función de la carencia de antecedentes penales computables -de acuerdo a los informes elaborados por el Registro Nacional de Reincidencia y la División Antecedentes de la P.F.A., agregados en la causa, y la certificación efectuada en su oportunidad- y las





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

características personales del nombrado CUELLO, circunstancias que permitían concluir que, en caso de recaer condena, la misma sería de ejecución condicional.

Sostuvo que coincidía con lo expuesto por la defensa en cuanto a que no resultaba aplicable la prohibición contemplada en el art. 19 de la ley N° 26.735, precisando que su no aplicación no obedecía a que aquella fuese inconstitucional sino que debía efectuarse una interpretación razonada de la misma. Agregó que debía tenerse en cuenta que el hecho atribuido en autos era de nula complejidad, de escasa lesividad, que no resultaba ser un supuesto de gravedad, que no era lo que tuvo en miras el legislador al sancionar la limitación del instituto en trato y que, de aplicar dicha restricción, aquella resultaría irrazonable. Concluyó que debía aplicarse el art. 76 bis del C.P. sin la reforma introducida por el art. 19 de la ley N° 26.735.

En cuanto a la reparación del daño que prevé el art. 76 bis del C.P., sostuvo que aquél debía implicar un esfuerzo por parte del imputado para solucionar y superar el conflicto. En ese sentido, teniendo en cuenta que el monto no ingresado fue retenido a los empleados en relación de dependencia aunado a que la pretensión fiscal junto con sus intereses punitivos fue cancelada íntegramente y lo que surge del informe patrimonial





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2
CPE 121/2021/TO1/8

confeccionado respecto al imputado de autos, consideró que el ofrecimiento efectuado en concepto de reparación del daño abastecía el concepto de reparación del daño en la medida de sus posibilidades y que, a su juicio, dicho requisito se encontraba cumplido.

Con relación a la realización de tareas comunitarias consideró correcta la propuesta de cuatro (4) horas semanales, por el tiempo que dure la suspensión de juicio a prueba y que el imputado podría convenir su realización con la entidad que propuso. Agregó que esa carga horaria le permitiría continuar con sus tareas laborales, teniendo en cuenta la edad del imputado y que ello también le iba a permitir estar en contacto con la comunidad.

Expresó que, en virtud a la escasa lesividad del hecho que se le imputaba, en atención a la calificación legal, carencia de antecedentes penales y encontrándose cumplimentados los restantes requisitos exigidos por la norma, prestaba su conformidad para que se conceda el beneficio de suspensión de juicio a prueba a favor del imputado Roberto Eduardo CUELLO, por el término mínimo de UN (1) AÑO con una carga horaria de cuatro (4) horas semanales.

En cuanto al destino del monto ofrecido en concepto de reparación del daño, en la medida que la





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

A.F.I.P. rechazó dicha propuesta, habiendo el imputado consentido a que se donen a una institución de bien público, entendió que ello debía integrar las reglas de conducta contempladas en el art. 27 bis del C.P.

Con respecto al ofrecimiento en concepto de reparación del daño formulado en representación de la persona jurídica EZEIZA SECURITY S.R.L., la Auxiliar Fiscal consideró que podía abarcar tanto a la persona física como jurídica, y que los cincuenta (50) kg. de mercaderías ofrecidos podían ser tomados en reemplazo de la realización de tareas comunitarias que la persona jurídica no podía cumplir por su propia naturaleza.

Por todo lo expuesto prestó su conformidad para que se suspenda el juicio a prueba respecto a Roberto Eduardo CUELLO y la persona jurídica EZEIZA SECURITY S.R.L. por el término de UN (1) AÑO.

9. Que, la circunstancia destacada precedentemente -en punto al consentimiento prestado por el Ministerio Público Fiscal a la solicitud de suspensión de juicio a prueba formulada por el imputado CUELLO por sí y en representación de la persona jurídica EZEIZA SECURITY S.R.L. y su defensa-, aunada al hecho que en la causa no hay parte querellante, constituye, a mi juicio, suficiente fundamento para suspender el trámite del proceso, con total independencia de la opinión que este tribunal pudiese tener





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

con respecto a las razones en que la referida petición y el respectivo consentimiento fiscal se sustentaron.

10. Que, en efecto, ello es así por aplicación del principio “*ne procedat iudex ex officio*”, regla fundamental que indica que el juez se encuentra impedido de promover el proceso por iniciativa propia y cuya inobservancia comprometería su imparcialidad y, consecuentemente, el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 de la C.N.).

11. Que, en ese sentido y, en primer término, cabe señalar que por el voto de los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni en causa “AMODIO, Héctor Luis”, A. 2098. XLI, Recurso de Hecho (del 12/6/2007), se expresó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dotó “...de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base, en consecuencia, el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal (Fallos: 234:270)...”; como así también “...Que a partir de ello, la función jurisdiccional que compete al tribunal de juicio se halla limitada por los términos del contradictorio, pues cualquier ejercicio de ella que trascienda el ámbito trazado por la propia controversia jurídica atenta contra la esencia misma de la etapa acusatoria de nuestro modelo de enjuiciamiento penal...”.

12. Que, en el mismo sentido, se ha explicado que “...la potencialidad de la función jurisdiccional se ve





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

limitada -en primer término- por la existencia de contradicción, es decir, controversia planteada por las partes ante el juez. Seguidamente, por el límite de la pretensión acusadora como garantía de equilibrio, al cumplir la función de salvaguarda del derecho de defensa en juicio del encausado, preservando además la imparcialidad del juzgador...”².

13. Que, por otra parte (aunque en la misma dirección), agrego que si la imparcialidad del juzgador y, consecuentemente, el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, se ven afectados cuando el Tribunal condena sin haber mediado acusación³, cuando eleva la causa a juicio sin haber mediado algún requerimiento en tal sentido⁴ y cuando instruye sumario de oficio⁵, no advierto razones suficientes para considerar que tal afectación no se produciría por el sólo hecho que el impulso oficioso del Tribunal se verifique en algún momento intermedio a los

² Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, en causa Nro. FCB 27987/2014/TO1/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada “Vázquez Cesar y otros/ recurso de casación” resuelta el 4/3/21, reg. 204/2021; voto del Dr. Alejandro W. SLOKAR, citando a su vez fallos en causa Nro. 1553/13, caratulada: “Bocanegra Castro, Liliana Yaquelin s/recurso de casación”, reg. no 665/14, rta. 30/4/14; causa Nro. 564/2013, caratulada: “Orozco Martínez, Jaquelina Natalia s/ recurso de casación, reg. no 2375/13, rta. 20/12/2013 y causa Nro. FMZ 2548/2013/1/CFC1, caratulada: “Martos Azcurra, Mariana Lourdes s/ recurso de casación”, reg. no 557/14, rta. 11/4/2014, del registro de esa Sala.

³ Confr. C.S.J.N., “Tarifeño”, Fallos 325:2019, “García”, Fallos 317:2043, “Cattonar”, Fallos 318:1324 y “Mostaccio”, Fallos 327:120.

⁴ Confr. C.S.J.N., “Quiroga”, Fallos 327:5863.

⁵ Confr. art. 195 del C.P.P.N.





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

anteriormente mencionados, como ocurriría en el “*sub lite*” en la hipótesis que lo solicitado por la defensa del imputado y consentido por la representación del Ministerio Público Fiscal no tuviese una recepción favorable.

14. Que, en esa misma línea, entiendo que es útil recordar que “...*el poder de jurisdicción no es algo que se tiene de oficio, sin habilitación externa, que se ve inhibido por actos u omisiones de la fiscalía. Al contrario, el poder de jurisdicción por regla está inhibido, y sólo puede ser habilitado cuando hay un requerimiento externo hábil. Así entendido, no es que los fiscales ‘impiden a los jueces su tarea de juzgar’, sino que, al contrario, en los delitos de acción pública sus requerimientos habilitan a los jueces al ejercicio de una jurisdicción que no podrían mover de oficio...*”⁶.

15. Que, en sentido análogo, es oportuno recordar los votos de distintos magistrados emitidos en casos que, si bien presentan distintas características al del “*sub lite*” (ya que no se trataba de la decisión dictada como consecuencia de pedidos de suspensión de juicio a prueba), su utilidad para ser mencionados en este supuesto

⁶ Confr. García, Luis M. “El caso ‘Quiroga’ o el primer golpe de demolición al actual sistema de enjuiciamiento criminal en el orden nacional. Reconstruyendo entre las ruinas hasta que se acuerde un plan de construcción alternativo”, en Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. T. 2, Ed. Hammurabi, Bs. As. 2007, pág. 218.





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

específico deriva del límite a la jurisdicción que en aquéllos casos (y a mi juicio también en éste) se entendió imponía la ausencia de posturas contradictorias entre el Ministerio Público Fiscal, por una parte, y el imputado y su defensa, por la otra. En ese sentido se orientan los votos del Dr. Luis M. GARCÍA (de fecha 17/4/2015, en autos CCC 28961/2012/12/CNC1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala 3), del Dr. Carlos Alberto MAHIQUES (en el mismo caso -voto al que adhirió el restante integrante del Tribunal Dr. Pablo JANTUS-), de la Dra. Magdalena LAÍÑO (integrando la Sala 6 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, el 4/12/2019, en autos CCC 2731/2016/3/CA1), del Dr. Guillermo J. YACOBUCCI (integrando la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, en causa 19289/2007/TO1/12/2/CFC4, “*L. J. A. s/recurso de casación*”, Reg. N° 240.20, del 23/04/20), del Dr. Alejandro W. SLOKAR (en el mismo caso de la Sala II de la C.F.C.P. recién citado), del Dr. Carlos Javier CARBAJO (el 2/7/2020 en causa CFP 20120/2018/To1/5/CFC1, Reg. N° 980/20, Sala IV de la C.F.C.P. y el 8/7/2020 en causa CFP 9630/2016/TO2/20/CFC6, Reg. N° 1011/20.4, Sala IV de la C.F.C.P.) y del Dr. Mariano Hernán BORINSKY (en el mismo caso de la Sala IV recién citado), entre otros.

Fecha de firma: 29/08/2023

Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CAROLINA ANDREA ROMBOLA, SECRETARIA



#38008499#381333604#20230829002833798



Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

16. Que, por otra parte, contribuye a reafirmar el criterio que se establece por la presente el hecho que “...*el Ministerio Público es quien representa a la sociedad agraviada por el delito y a quien, por ello corresponde verificar la razonabilidad y el cumplimiento de los requisitos requeridos por la ley...*”

“Si bien no es el único órgano garante de la legalidad, el Ministerio Público Fiscal tiene como objeto constitucional específico y puntual garantizar dicha legalidad en beneficio de la comunidad (cf. Ekmekdjian, Miguel Ángel, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo V, Buenos Aires, 1999, p. 631 y ss.).”⁷.

17. Que, en definitiva, el Ministerio Público Fiscal es el que vela por los intereses generales de la sociedad y por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República; el que representa y defiende el interés público; y el que tiene el deber de actuar con objetividad, requiriendo la aplicación justa de la ley, procurando el resguardo equilibrado de todos los valores y principios jurídicos vigentes y el ejercicio racional y ponderado del poder penal del estado⁸.

⁷ Confr. C.F.C.P., SALA IV, CPE 2683/2011/TO1/CFC1, Reg N ° 1303/16.4, del 17/10/2016, voto del Dr. Borinsky.

⁸ Confr. arts. 120 de la Constitución Nacional; 1 y 25 incisos “a”, “b” y “g” de la ley N° 24.946; 1 y 9 inciso “d” de la ley N° 27.148.





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

18. Que, ante el estado de cosas descripto, únicamente cabe examinar si la opinión del Ministerio Público Fiscal supera exitosamente el control de logicidad y fundamentación que debe llevarse a cabo, de conformidad con lo que surge del art. 69 del C.P.P.N., por el que exige que los representantes del Ministerio Público formulen sus requerimientos en forma motivada y razonable, so pena de decretarse su invalidez en caso de que así no se hiciere, exigencia ésta cuya observancia se verifica en el caso, sobre todo partiendo de la base que *“...Motivar significa poner de manifiesto las razones que justifican el juicio lógico que estas razones contienen, e implica la necesidad de exponer de qué manera se llega a una determinada conclusión”*⁹.

19. Que, en efecto, con independencia de la opinión coincidente o discrepante que el suscripto pudiese tener con respecto a aquella fundamentación, no caben dudas respecto a que, como se dijera, en este caso aquella efectivamente existe y supera exitosamente el test de logicidad y fundamentación.

20. Que, en relación a lo expuesto por la consideración anterior, debe tenerse presente lo explicado (aunque para otra clase de situaciones) por los Dres. Luis

⁹ Confr. FOLGUEIRO, Hernán L., *“La necesidad de fundamentación de los requerimientos del Ministerio Público”*, La Ley, 2001-E, 807, cit. por REY, Sebastián A. en *“Tres cuestiones controvertidas vinculadas a la aplicación de la suspensión del juicio a prueba”*, L.L., DJ 29/3/2006, 818.





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

M. García¹⁰, Guillermo J. Yacobucci¹¹ y Augusto M. Diez Ojeda¹² sobre la diferencia entre el control de logicidad y fundamentación de la opinión del Ministerio Público Fiscal que debe llevar a cabo el órgano jurisdiccional y la coincidencia o discrepancia que dicho órgano jurisdiccional pudiese tener con dicha fundamentación.

21. Que, en efecto, ante la imposibilidad de continuar con la sustanciación de este proceso que deriva de las circunstancias destacadas por las consideraciones que anteceden, no cabe sino expedirse del modo solicitado por el imputado CUELLO por sí y en representación de la persona jurídica EZEIZA SECURITY S.R.L. y su defensa (y consentido por el Ministerio Público Fiscal), sin llevar a cabo algún examen tendiente a determinar la coincidencia o la discrepancia del suscripto con relación a los fundamentos en los que se basó aquella opinión de la Fiscalía que, en las condiciones ya explicadas y por resultar ese análisis necesariamente posterior a la verificación de tal imposibilidad, resultaría ostensiblemente inoficioso (por carecer de alguna finalidad a los fines del trámite de las actuaciones), evidentemente innecesario e inconducente

¹⁰ en C.F.C.P., Sala II, Causa Nro. 7957, “VIERA, Carlos Alberto s/recurso de casación”, Reg. N° 17.269, del 6/9/2010.

¹¹ en C.F.C.P., Sala II, Causa Nro. 13.655, “NIGRO, Pablo Daniel s/recurso de casación”, Reg. N° 18915, del 12/7/2011.

¹² en C.F.C.P., Sala IV, causa Nro. 9950, “BAIGORRI ALEXANDER, Ricardo José Luis s/recurso de casación”, Reg. N° 11230.4, del 9/2/2009.





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

(pues, cualquiera fuese la opinión del suscripto, por las razones expresadas, la suspensión del proceso resulta inexorable) y, por lo tanto, impropio de una resolución judicial, que no constituye una vía para consideraciones meramente declarativas de opiniones personales sin trascendencia para el trámite de la causa.

22. Que, en cuanto a la razonabilidad de las ofertas de reparación efectuadas por los imputados de autos, teniendo en consideración el rechazo exteriorizado por la presunta damnificada (A.F.I.P.-D.G.I.), cabe concluir que se produce, como consecuencia necesaria, la eliminación de la obligación de reparar, al menos como condición del otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba¹³.

23. Que, no obstante, el examen de aquella razonabilidad igualmente subsiste por las razones desarrolladas al resolver, en calidad de juez subrogante, en la causa N° 399/2004 (116) del entonces Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 3, en fecha 19/05/2010 (Reg. 122/2010 de dicho tribunal), a las que remito por motivos de brevedad y que por lo tanto deberán considerarse parte integrante de la presente.

¹³ Confr. BOVINO, Alberto, *‘La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino’*, Bs. As. Ed. Del Puerto, 2005, pág. 151 y, en sentido análogo, VITALE, Gustavo L, *“Suspensión del proceso penal a prueba”*, Editores del Puerto, 2da. edición actualizada, Buenos Aires, 2004, pág. 168.





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2
CPE 121/2021/TO1/8

24. Que, sin perjuicio que subsiste el examen en punto a la razonabilidad de la oferta de reparación patrimonial, por los motivos antes expresados, también resultaría innecesario, inoficioso e inconducente exteriorizar la opinión del suscripto pues, aun cuando aquélla podría no ser coincidente con la señalada por la representante del Ministerio Público Fiscal, de todas maneras, tal opinión también cabe tenerla por fundada.

25. Que, en consecuencia y en función de lo hasta aquí expuesto, corresponde hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba solicitadas por Roberto Eduardo CUELLO y EZEIZA SECURITY S.R.L., junto a su defensa, en las condiciones sobre la base de las cuales prestó su consentimiento la representación del Ministerio Público Fiscal.

Por todo ello; de conformidad a lo preceptuado por los arts. 27 bis, 76 *bis* cuarto párrafo y 76 ter del C.P. y 293 y 515 del C.P.P.N.,

SE RESUELVE:

I. HACER LUGAR A LA SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA solicitada por **Roberto Eduardo CUELLO** por sí y en representación de la persona jurídica **EZEIZA SECURITY S.R.L.**, cuyos demás datos obran en autos, junto a su defensor particular.





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

II. ESTABLECER COMO PLAZO DE SUSPENSIÓN el de **UN (1) AÑO**.

III. DISPONER que, en el término precedentemente mencionado, el imputado **CUELLO** observe las siguientes reglas de conducta:

1. Fijar residencia y notificar al tribunal de cualquier modificación de aquélla.

2. Realizar tareas comunitarias en la **Parroquia “Buen Pastor”** sita en la calle Aranguren 691 CABA, por cuatro (4) horas semanales durante el lapso de la suspensión (lo que hace un total de ciento noventa y dos - 192- horas en el período fijado), debiendo remitir los comprobantes respectivos que acrediten su cumplimiento de forma trimestral.

IV. TENER POR RAZONABLE la oferta de reparación efectuada por **Roberto Eduardo CUELLO** por sí y en representación de la persona jurídica **EZEIZA SECURITY S.R.L.**, junto a su defensor particular, en la audiencia prevista por el art. 293 del C.P.P.N. y **tener aquellas ofertas por rechazadas por la presunta damnificada** (A.F.I.P.-D.G.A.).

V. DISPONER que la suma ofrecida en concepto de reparación del daño por parte de **Roberto Eduardo CUELLO por sí** (ochocientos noventa y siete mil pesos -\$





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

897.000-) sea donada al **“Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. Prof. Dr. Juan P. Garrahan”** (tel: 4308-3080 o 4122-6000), la cual deberá ser efectivizada por el nombrado en dos (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos pesos (\$ 448.500) cada una, dentro de los diez primeros días del mes, a contar desde que la presente adquiera firmeza, con la obligación de aportar las debidas constancias de cumplimiento a este Tribunal.

V. DISPONER que la donación de cincuenta (50) kilogramos de mercaderías ofrecida en concepto de reparación del daño por parte de **Roberto Eduardo CUELLO como representante de la persona jurídica EZEIZA SECURITY S.R.L.** (previa coordinación con las autoridades de la institución y según sus necesidades) sea realizada a favor del **Comedor Los Piletones-Fundación Margarita Barrientos** (con domicilio en Plumerillo 3995, Villa Soldati, CABA, teléfono de contacto: 4919-1333/1049, Email: comedorlospiletones@yahoo.com.ar), dentro de los diez primeros días del mes, a contar desde que la presente adquiera firmeza, con la obligación de aportar la debida constancia de cumplimiento a este Tribunal.

VI. HACER SABER al nombrado **Roberto Eduardo CUELLO** por sí y como representante de la persona jurídica **EZEIZA SECURITY S.R.L.:**





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral Penal Económico N°2

CPE 121/2021/TO1/8

a) que deberá informar al tribunal cualquier impedimento o petición sobreviniente con relación al cumplimiento de lo dispuesto por la presente; y,

b) que, en caso de no dar cumplimiento a lo resuelto sin causa justificada, se continuará el proceso con relación a los hechos que constituyen el objeto procesal de las presentes actuaciones.

VII. DAR INTERVENCIÓN a la Secretaría de Ejecución de este Tribunal, una vez firme la presente, a fin de controlar el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas de conformidad con lo establecido por el art. 515 del C.P.P.N. (confr. art. 72 bis de la ley N° 24.121, según reforma introducida por el art. 11 de la ley N° 26.371).

Regístrese, notifíquese y, firme que sea, cúmplase y realícense las comunicaciones pertinentes.

DIEGO GARCÍA BERRO
JUEZ DE CÁMARA

ante mí

CAROLINA A. ROMBOLÁ
SECRETARIA

